

El golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela y sus causas

Margarita López Maya¹

Resumen

La participación civil en el golpe y el contragolpe de abril de 2002 son la clave para comprender la situación venezolana. Después de dos decenios de recesión económica y empobrecimiento social se ha producido una aguda polarización en la sociedad. Dicha polarización encontró formas de expresión política en los años noventa a través de proyectos renuentes a reconocerse uno a otro, porque estaban en juego las propias reglas del juego político. Esto hace que, aunque se haya superado el golpe de Estado de abril, la crisis siga abierta, igual que las tentaciones conspirativas y autoritarias.

Abstract

Civil participation in the coup and counter-coup of April 2002 plays a key role for the understanding of the Venezuelan situation. After two decades of economic recession and social impoverishment an acute polarization has resulted within that society. Such polarization found ways of political expression in the 1990's through projects that were reluctant to mutual acknowledgement, due to the fact that the very rules of the political game were at stake. This entails that, although the April coup d'Etat has been superseded, the crisis is still open, as well as the conspirating and authoritarian temptations.

Palabras Claves: Venezuela, Golpe de Estado, Crisis, Polarización Social.

¹ Historiadora, doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y directora de la *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*.

Un primer paso para el análisis y la evaluación de la crisis política que hoy aflige a la sociedad venezolana consiste en reconstruir de la manera más precisa y seria posible lo acaecido entre el 11 y el 14 de abril pasado y comenzar a sistematizar los procesos que la causaron. En este artículo se ensaya esta tarea. En la primera parte se hace una interpretación de lo ocurrido entre el 11 y el 14 de abril a partir de diversas fuentes hemerográficas. En la segunda parte se intenta una primera aproximación sistematizada a las causas que concurrieron para precipitar la ruptura constitucional.

La reconstrucción histórica de los sucesos entre el 11 y el 14 de abril debe considerarse preliminar, en virtud de lo reciente de los acontecimientos y de su intensidad. Sin embargo, se ha tenido el cuidado de confrontar entre sí diversas fuentes hemerográficas para cumplir con los requisitos metodológicos de la disciplina histórica. La información utilizada procede de seis periódicos, 4 nacionales y dos extranjeros: *El Nacional*, *El Universal*, *Tal Cual*, *El Nuevo País* (tomando exclusivamente la versión de la periodista Patricia Poleo), *El País* (España), *La Jornada* (México). Adicionalmente, se han tomado algunas informaciones bajadas del internet, de esos días y los siguientes, de portales de diverso signo ideológico.

Los sucesos

El día 11

El golpe de Estado del 11 de abril tuvo como desencadenante directo el paro laboral de los empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la industria petrolera propiedad del Estado venezolano, motivado por el nombramiento por parte del Ejecutivo Nacional en febrero de este año de una nueva directiva para la empresa. Este paro petrolero fue apoyado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que el día 9 de abril llamó a paro laboral de 24 horas en solidaridad con la empresa. El paro de la CTV contó con el apoyo explícito de los sectores empresariales representados en Fedecámaras, así como de la iglesia católica representada por el episcopado venezolano. El paro tuvo ese martes 9 sólo un éxito parcial, pues a diferencia del paro cívico del 10 de diciembre del pasado año (López Maya, 2002), no había logrado parar el transporte colectivo, ni el servicio bancario, ni los centros de acopio y distribución de víveres y alimentos a los mercados mayores y menores de la ciudad capital ni otros varios servicios. La situación era similar en otras ciudades del país, había más o menos paralización de comercios y abastos y algunos servicios como el de educación privada, pero la huelga carecía de la contundencia del 10 de diciembre. El paro no evidenciaba capacidad de mantenerse por mucho tiempo. Sin embargo, la directiva de la CTV, en lo que pareció una decisión temeraria, convocó el 9 en la tarde este paro por 24 horas más. El miércoles 10 el paro seguía sin expresar contundencia y la manifestación convocada esa tarde frente a la CTV tampoco. Sin embargo, los

dirigentes de la confederación sindical sorprendentemente llamaron esa tarde a una huelga general indefinida. Como es sabido, pero vale la pena enfatizarlo, una huelga general indefinida tiene un carácter insurreccional. Con esa decisión, la CTV como representante de los trabajadores sindicalizados, se declaraba en rebelión total frente al gobierno.

La decisión insurreccional de la CTV fue respaldada ampliamente por sectores empresariales organizados y por una gama de organizaciones sociales de clase media y alta y partidos políticos de oposición. El partido Primero Justicia, por ejemplo, en boca de uno de sus dirigentes, Leopoldo Martínez, dijo: “Vamos hasta el final, hasta que caiga [el presidente Chávez]”; Cipriano Heredia de la organización social Visión Emergente declaró: “...estamos aplicando los artículos 333 y 350 de la Constitución, porque el gobierno se ha salido de su cauce constitucional con lo que hizo contra los medios y el allanamiento contra AD” (*El Universal* 11-04-02).² La “Coordinadora por la Democracia y la Libertad”, que estas organizaciones habían constituido para pedirle la renuncia a Chávez, convocó a una marcha desde el Parque del Este en la ciudad de Caracas hasta la sede de Pdvsa en Chuao, también en el este de la ciudad, para el día jueves 11 en la mañana.

El 11 de abril, una nutrida marcha se inició hacia las 10 de la mañana e hizo su recorrido anunciado. Pero al mediodía, al llegar al edificio de Pdvsa en Chuao, los convocantes, Fedecámaras, la CTV y algunos dirigentes de las otras organizaciones sociales, animados por las dimensiones de la marcha decidieron arengar a las multitudes para que se dirigiesen al Palacio Presidencial de Miraflores para, como lo señaló Carlos Ortega, presidente de la CTV, “sacar a Chávez”. La marcha, el mensaje y la convocatoria a Miraflores fueron profusamente informadas, convocadas y cubiertas por los canales privados de televisión. De manera que la marcha fue creciendo en la medida que iba hacia el centro de Caracas. Como quien convoca a un concierto o a una fiesta los canales pasaban la propaganda gratis para que todos los venezolanos concurrieran a la insurrección. Porque esta marcha también tenía evidente naturaleza insurreccional: se estaba haciendo sorpresivamente y sin ningún permiso dentro de una huelga general indefinida.

El adversario, el gobierno constitucional, la autoridad, está en Miraflores, rodeado por simpatizantes que están haciendo ya el tercer día de vigilia desde que estallara el paro laboral, protegiendo al Presidente. Al anunciarse que la marcha opositora prosigue a Miraflores, el partido de gobierno, el Movimiento Quinta República (MVR) comienza a convocar de urgencia a sus simpatizantes y militantes para que con su presencia impidan que la oposición llegue a las puertas del palacio. Los ánimos, a diferencia de la fiesta que se está desarrollando en el este de la ciudad es de creciente ira, posiblemente mezclado con sentimientos de temor: las sólidas

² Estos artículos se refieren, el primero, al deber de la ciudadanía de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la constitución. El segundo, da derecho a los ciudadanos de desconocer cualquier régimen que contrarie los “valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

manifestaciones pro-gobierno de los últimos meses han sido pobremente reseñadas por los medios de comunicación impresos o audiovisuales. En contraste, las protestas de la oposición reciben siempre amplia cobertura audiovisual y se agigantan en los diarios impresos. Las encuestas que se publican muestran una baja sorprendente de la popularidad del gobierno. Pronunciamientos militares en los últimos meses corroboran que en los cuarteles hay inquietud y rebelión. Los simpatizantes del Presidente están resentidos. Se agolpan alrededor de Miraflores con gritos de confrontación: “No pasarán”, repiten.

Al entrar la marcha opositora al centro de Caracas (aproximándose al palacio presidencial), comienzan los disturbios. Hacia las 2.00 pm las multitudes prochavistas están tirando piedras, palos hacia el hotel Edén, que queda al lado del Palacio de Miraflores, donde aparentemente francotiradores apostados en la terraza están atacándolos (*Tal Cual*, 17-04-02). A esa misma hora en el edificio de La Nacional, en puente Llaguno, un poco más allá del palacio y donde hay oficinas de la alcaldía Libertador, donde gobierna el MVR, los empleados no pueden salir por la violencia que se ha desatado en la calle. En la terraza de este edificio también están apostados francotiradores. Aparecen personas armadas de lado y lado de la confrontación callejera, la violencia se desata y al final de la tarde el número de muertos alcanza las 19 víctimas, pro y anti-chavistas (*El Universal*, 27-04-02).

Estamos ya claramente en el golpe de Estado. Las informaciones de los días siguientes revelan que a la misma hora en que comenzaba la confrontación en la calle, a eso de las 2.30 pm, un grupo de militares con el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez como cabecilla están en una oficina en Chacao ensayando un pronunciamiento que harían por los medios de comunicación desconociendo al gobierno y al Presidente (*El Nacional*, 13-04-02). Se trata, nos informa este diario, de un grupo de militares que vienen reuniéndose desde hace meses, disgustados con la política del gobierno, especialmente su acercamiento a Cuba y países como Irak e Irán, por las tensiones que esto ha provocado con los EEUU. La comunicación de estos militares saldría al aire a las 7 de la noche, pues fue retardado por la cadena del Presidente, que comenzó poco antes de las 4.00 pm. Los medios audiovisuales, al comenzar la cadena del Presidente deciden – también en clara rebeldía - dividir la pantalla, como ya lo habían hecho el día anterior, para mostrar los disturbios que están sucediendo en el centro de Caracas. El Presidente anuncia que va a sacar del aire a los medios privados, pero éstos siguen transmitiendo vía señal por cable. La alocución presidencial también es sabotada por un ruido que interfiere la voz en la señal. Al terminar la cadena, en el canal 10 el dirigente copeyano y hombre del Opus Dei, José Rodríguez Iturbe, exhorta a los militares a salir de sus cuarteles y terminar el trabajo que los civiles han comenzado con un costo de sangre. A las 7.00 pm sale al aire el video del vicealmirante Ramírez y su grupo. Poco más tarde se transmite un pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, quien informa que dicha arma no acatará órdenes presidenciales. Hacia las 8.00 pm el ex hombre fuerte del gobierno

de Chávez y del MVR, Luis Miquilena, sale por los medios pidiendo una salida institucional a la crisis y dice que Chávez tiene las manos ensangrentadas (*El País*, 7-05-02). A esa hora los generales Manuel Rosendo y Hurtado Soucre negocian con Chávez su salida y amenazan con bombardear el palacio de Miraflores (Istúriz en *La Jornada*, 17-04-02). A las 10.00 pm el canal del Estado es forzado a cesar sus emisiones. A la 1.10 de la madrugada del día 12 los medios comienzan a informar que Chávez se ha entregado a los militares rebeldes. Pasadas las 3.00 am el general en jefe de La Fuerza Armada, Lucas Rincón Romero, anuncia que Chávez ha renunciado. Cerca de las 4.00 am el presidente sale de Miraflores hacia el Fuerte Tiuna, sede principal de las Fuerzas Armadas en Caracas, con la Escolta Presidencial. Va a ser recibido allá por el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Baltasar Porras. A las 4.15 am Carmona anuncia que asumirá la presidencia de Venezuela al frente de un gobierno de transición cívico-militar.

El 12 de abril

Por informaciones publicadas con posterioridad al retorno del presidente Chávez, sabemos que a la misma hora que se posesionaba el señor Carmona del cargo de Presidente comenzaban los problemas entre los diversos actores que habían contribuido a la caída del gobierno constitucional. El presidente de la CTV, y el general comandante del Ejército parece que fueron los primeros en darse cuenta que el golpe militar no iba a responder a sus expectativas (*El Nuevo País*, 17-04-02). Los intereses que querían prevalecer parece que tenían poco o nada que ver con la democracia y la participación, razón pública esgrimida para ejecutar o apoyar el golpe según casi todos sus protagonistas. Por un lado, constitucionalistas de fama redactaban un decreto autoritario como pocas veces se ha visto en la historia del país; por otra parte, en nombre de la llamada “masacre de El Silencio”, comenzaba una cacería de brujas contra las autoridades del régimen caído. Acompañados por turbas enardecidas, alcaldes del partido Primero Justicia sacaban de sus moradas humillantemente a funcionarios del gobierno anterior. A las 5.30 de la tarde, luego de la autojuramentación de Carmona y la emisión de su primer decreto, la situación estaba clara: la salida de Chávez había conducido a la sociedad a un gobierno de facto de extrema derecha, una plutocracia. Se cambió el nombre de la república, se disolvieron los poderes públicos, se suspendió la venta de petróleo que bajo convenio se tenía establecido con Cuba, se allanaba sin orden judicial, se suspendían las 49 leyes de la Habilitante, se echaba para atrás el aumento de sueldos y salarios decretado por el gobierno derrocado. En pocas palabras estábamos sin estado de derecho.

Ante la evidencia de que Venezuela caminaba apresuradamente hacia un retroceso de todos sus logros en el siglo XX como sociedad democrática y civilizada, la resistencia que ya venía evolucionando tímidamente ese día 12 se hizo patente al

caer la noche. La ciudad de Caracas fue sacudida por una cacerolazo descomunal que se oía en los barrios populares del oeste de la ciudad, al tiempo que frente al Fuerte Tiuna comenzaron, esta vez sin convocatoria por los medios de comunicación, a reunirse las multitudes exigiendo ver a Chávez y que él les dijera “que había renunciado”. También se protagonizaban disturbios y tiroteos en esta zona de Caracas. Poco después de la alocución del ahora dictador Carmona, un medio de comunicación comunitario alternativo, radio Fe y Alegría, transmitió una entrevista con el ministro de Educación depuesto, Aristóbulo Istúriz, quien contó las últimas horas de Chávez en el palacio presidencial y señaló con claridad que éste no había renunciado. Los sectores que apoyaron la insurrección del día anterior no salieron a defender a su gobierno. Así las cosas, los sectores populares tomaron las calles, cerraron las vías de acceso de la ciudad de Caracas para exigir el retorno de sus instituciones, de su Presidente. En otras ciudades del país también ocurría esta sorprendente movilización.

Restituida la institucionalidad

Desde la mañana del sábado 13 la situación del nuevo gobierno se hizo crítica. Carmona se reunió con su gabinete provisorio y los medios de comunicación. Estos últimos le piden que rectifique el decreto dictatorial e incorpore a la CTV a las reuniones del poder. Se sabe ya que el general Raúl Isaías Baduelli, comandante del batallón de paracaidistas del Ejército, está en rebeldía en la base militar de la ciudad de Maracay, la principal del país, así como que están alzándose otras guarniciones. Las multitudes frente al Palacio de Miraflores están creciendo. En el Fuerte Tiuna el comandante de la Tercera División de Infantería, general García Carneiro, salió en tanqueta hacia la zona sur de Caracas, El Valle, gritándole a la multitud: ¡Soy un soldado y estoy con Chávez! (*El Nuevo País*, 18-04-02). Al mediodía comienzan a llegar a Miraflores los designados para su juramentación como ministros del nuevo gobierno. Algunos quedarán atrapados en la sede gubernamental porque el contragolpe está en franco desarrollo, se da orden de evacuar el edificio y la Guardia de Honor del palacio se alza, mandándole señas a la multitud en la calle de que está con ella. A partir de ese momento, poco después de mediodía, comienza la llegada de los ministros del gabinete de Chávez a Miraflores. Carmona se va al Fuerte Tiuna. A las 3.30 pm el comandante en jefe del Ejército sale de nuevo, como el día 11, por una cadena de los medios para anunciar que su arma sólo apoyará al nuevo gobierno si cumple ciertas condiciones, entre ellas modificar el decreto dictatorial y mantener las políticas sociales del gobierno de Chávez. Carmona anuncia que se reformará el decreto cuestionado pero ya es muy tarde. Mientras los medios de comunicación pasan una programación regular, como si nada en el país pasase, la ciudad de Caracas está cortada de sus accesos por los cuatro costados, los sectores populares marchan hacia Miraflores desde el este, el sur y el oeste, hay saqueos en distintas zonas, se van sumando las

guarniciones al contragolpe, los ministros del gobierno depuesto van llegando a Palacio uno a uno. Los medios de comunicación internacional informan, gracias a entrevistas con el Fiscal General y la esposa de Chávez, que el presidente Chávez no ha renunciado y está preso. A las 8.00 pm las fuerzas del gobierno constitucional retoman el canal del Estado, vuelve la señal y desde allí informan por fin a los venezolanos, que controlan Miraflores desde mediodía. A las 10.00 pm Carmona renuncia y a las 3.30 de la madrugada del día 15 el Presidente regresa en helicóptero a Miraflores para retomar al poder. Dirige unas palabras a la multitud que lo está esperando desde temprano y les hace gestos de que se vayan a dormir.

Las causas del golpe y de la actual crisis política

De este recuento hecho con la información hasta ahora disponible quedan nítidamente expuestos tres rasgos significativos de la crisis política abierta con el golpe de Estado del 11 de abril: el primero es que el golpe militar que depone a Chávez es precedido por una insurgencia civil contra la autoridad constitucionalmente electa. Esta insurrección está compuesta por sectores empresariales organizados, la alta gerencia de Pdvsa, sectores medios y altos organizados en lo que ellos llaman la “sociedad civil”, trabajadores sindicalizados en la CTV, jerarquía de la iglesia católica, medios de comunicación privados, partidos políticos de oposición. El segundo aspecto es que el golpe militar que derroca al Presidente, aunque sigue teniendo importantes aspectos desconocidos, no es un sólo golpe, hay al menos dos sublevaciones militares distintas: una que viene de la Armada encabezada por Ramírez Pérez, que lleva meses gestándose y otra, la que en definitiva da el golpe, que es el de altos mandos del Ejército seguido luego por altos mandos de la Guardia Nacional. Aunque no se descarta, no está claro que estuvieran relacionados. El tercer rasgo es que el gobierno es repuesto por la acción simultánea de un contragolpe militar, promovido por sectores militares entre los cuales el mismo Ejército que dio el primer golpe tiene importante participación, y la movilización de sectores populares organizados y espontáneos, partidos políticos del oficialismo, medios de comunicación internacionales y nacionales alternativos, y presión de gobiernos internacionales, especialmente de la OEA.

A partir de esta evidencia las causas de esta crisis política deben dirigirse a responder dos preguntas análogas y cruciales ¿por qué, por una parte, grupos civiles de peso decidieron emprender el día 10 y 11 una insurrección abierta contra un gobierno legítimamente constituido? O, puesto de otra manera, ¿por qué, como lo afirmaban reiteradamente desde días anteriores al golpe, estos sectores consideraban ilegítimo al gobierno? La otra, tan crucial como ésta, ¿por qué otro grupo significativo de civiles se movilizó para reponer el gobierno de Chávez poniendo en peligro incluso sus vidas? Para ellos no sólo era legal el gobierno depuesto sino legítimo. La participación civil en el golpe y en el contragolpe es el meollo de la crisis política que padecemos. Y sólo comprendiendo por qué se ha

producido esta fractura de la sociedad venezolana en posiciones antagónicas, podremos tomar los caminos correctos para superar en democracia y paz la situación en que nos hallamos.

Los golpes y la crisis política que han generado los acontecimientos de abril responden a una causalidad compleja, cuya trama se ha tejido en la dinámica de procesos sociohistóricos y sociopolíticos que poseen distintas temporalidades:

Desde una perspectiva socioeconómica, son más de dos décadas de recesión económica y empobrecimiento social. El empobrecimiento en Venezuela ha sido brutal, creciente y sostenido, medido con cualquiera de los indicadores comúnmente usados para evaluar la situación socioeconómica de una sociedad. Es un caso paradigmático en América Latina (López Maya y Lander, 2001).

Además, se ha producido una polarización social creciente que ha derivado tanto de la recesión económica como de la aplicación de políticas económicas neoliberales regresivas en términos de distribución del ingreso. Los venezolanos pobres y empobrecidos han percibido en el transcurso de estos años que su sociedad es una de ricos y pobres con escasa posibilidad de movilidad y ascenso social.

El resentimiento social ha sido, entonces, una consecuencia inevitable, si se recuerda que esta sociedad desde 1958 se dio un orden democrático. Ese orden democrático emergente en su momento fue concebido no sólo como un orden de libertades públicas sino también uno que promovía mayores grados de equidad y justicia social. Esta idea de democracia todavía encuentra fuertes raíces en el pueblo de Venezuela. Que esto ya no se cumpla, ha resquebrajado fuertemente las bases de legitimación de la democracia venezolana. Este es el escenario en donde se han estado moviendo con relativo éxito los actores, no sólo de esta crisis política sino de la precedente, entre 1992 y 1993. Este, es el escenario de fondo, el caldo donde se cultivan los golpes contra la democracia.

En un libro clásico de la sociología publicado en 1978 por Barrington Moore jr., que se titula *La injusticia. Las bases sociales para la obediencia y la rebeldía*, se explica como toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución o implícitos como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado viola esos límites, se produce indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía. En Venezuela vivimos tiempos de indignación moral y sentimientos de injusticia. Los límites establecidos para la convivencia social han sido violados en primer lugar por las condiciones socioeconómicas que padecen las mayorías. Pero también por factores sociopolíticos, que son los que en última instancia explican por qué algunos actores optan por una rebeldía que quiebra la institucionalidad democrática.

La polarización social señalada ha encontrado en el transcurso de la década de los noventa expresión política en actores y proyectos polares también, que hasta la fecha se muestran incapaces de reconocerse “uno” al “otro”, de respetarse entre

sí y, consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego transparentes, en la lucha por alcanzar el predominio político en nuestra sociedad. La sociedad venezolana vive desde los 90 lo que Gramsci conceptuó como una lucha hegemónica, donde distintos actores con proyectos distintos para la sociedad buscan predominar, recurriendo a reglas institucionales pero también extra-institucionales (Laclau, 1985). En diferentes momentos de esta lucha hegemónica, en 1992 y en 2002 para ser precisos, actores decidieron tirar el tablero del juego democrático para alcanzar el predominio político. Por fortuna hasta ahora ninguno de los dos tuvo éxito.

A partir de 1998, de acuerdo a reglas democráticas establecidas, en elecciones transparentes alcanzó el predominio político para gobernar según su proyecto ofrecido en campaña electoral, Chávez y la alianza de fuerzas conocida como el *Polo Patriótico*. Cristalizó entonces esta hegemonía. Estos mismos actores y su proyecto fueron ratificados por la sociedad venezolana en el referéndum constitucional de 1999 y en elecciones de 2000. Fue un paso más en la consolidación de su hegemonía. Chávez y su alianza política representan principal, aunque no exclusivamente, los intereses de los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico venezolano que anhelan inclusión y justicia social. Son la expresión política de ese polo social. Sus adversarios, con distintos matices e ideologías, han recibido el respaldo mayoritario de los sectores medios y altos de la población. Ellos expresan el otro polo social, por el momento no hegemónico.

Si bien la polarización política actual tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos perder de vista por los poderosos intereses que tras ellos se esconden, hay sin embargo, factores adicionales que a mi modo de ver han llevado la confrontación legítima a un antagonismo extremo, que pone en peligro la posibilidad de una salida democrática que restablezca la convivencia social pacífica entre los venezolanos. Por una parte, desde que asumiera el poder, pero de manera más aguda desde los últimos meses de 2001, el gobierno de Chávez ha alterado las reglas de la convivencia social venezolana anterior, en el sentido que le da Moore al término: ha aprobado leyes medulares para su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático; ha hecho uso de símbolos de fuerza y amenazas para amedrentar a la oposición cuando ésta ha ejercido su derecho a la protesta aunque es indispensable reconocer que en los tres años de gobierno de Chávez la represión del Estado a estas movilizaciones ha sido notoriamente baja en contraste a las prácticas de gobiernos previos; el Presidente ha recurrido permanentemente a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público, el oficialismo ha buscado penetrar organizaciones sociales como la CTV para cooptarlas o ahogarlas, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección, de mantener la paz social.

Por otra parte, muchos de los actores sociales y políticos de la oposición se radicalizaron ante esta conducta gubernamental y convocaron a la insurrección del 11 de abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de fuerzas que lo respaldan. Estos sectores,

en medio de su resentimiento, respaldados por medios de comunicación, también polarizados y radicalizados, por encuestas de opinión, la mayoría de las cuales también están polarizadas del lado de la oposición, identificaron su rechazo al gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su posición, se trataba de una insurrección “popular” mayoritaria, por no decir unánime. El gobierno no tenía ya piso político según estos grupos. Pero, como se hizo patente en el recuento anterior, esto era un craso error de diagnóstico.

¿Por qué la oposición no percibía al otro, a los sectores populares que seguían dándole un sólido respaldo a Chávez y su proyecto político? Aquí jugó papel central la calidad de las organizaciones sociales y políticas de oposición. O quizás habría que decir con más propiedad la calidad de sus dirigentes. Fedecámaras, la CTV, los medios de comunicación privados, la alta gerencia de Pdvsa, las diversas organizaciones que se autodenominan “sociedad civil”, inclusive los partidos emergentes como Primero Justicia, o tradicionales como Copei, siguen concepciones doctrinarias que exaltan las virtudes del ámbito privado, mientras colocan todos los vicios de la vida en sociedad en el ámbito público, en el Estado. Muchos de ellos, organizaciones sociales y medios de comunicación, se han fortalecido en Venezuela como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos, que se convirtió en sentido común en los años 80 y 90. El discurso democrático de estas organizaciones se agota rápidamente, como en efecto lo corroboramos en su respaldo inicial a un golpe de Estado, toda vez que -salvo la CTV- son organizaciones conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad y no con la solidaridad social. Son organizaciones concebidas, en palabras de Edgardo Lander, para la defensa y preservación de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de los que no tienen (1995: 135). De manera que les resultan irrelevantes, amenazadoras o incluso inexistentes las organizaciones populares cuya concepción de ciudadanía es distinta, porque en ellos se trata de luchar por el cambio. Políticamente hablando, los sectores populares sólo pueden ser vistos por los otros, cuando los ven, como no ciudadanos y amenazas a la propiedad y a la seguridad. De allí el frecuente uso de calificativos despectivos como hordas, turbas, etc. para referirse a ellos. Este no es el caso de la CTV procedente de otros orígenes doctrinarios y políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa legitimidad, pues el proceso electoral que los llevó a los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno de vicios, se plegó a las concepciones de esta llamada sociedad civil y tuvo responsabilidad central en el golpe.

La ceguera de esta oposición le hizo juego a poderosos intereses que no creen ni se interesan por la democracia, llevando al quiebre institucional y a la salida plutocrática. Porque el 11 de abril no se estaba ante la presencia de una revuelta popular, al estilo de las que derrocaron el socialismo realmente existente en algunos países de Europa Central, o, más recientemente, la revuelta popular que condujo a

la renuncia del presidente De La Rúa en Argentina a fines del año pasado. Estos gobiernos y el Estado mismo que representaban habían perdido toda legitimidad, las insurrecciones allí reflejaban una carencia total de piso político. Ese no era el caso de Chávez y su alianza política. En este caso presenciábamos una gigantesca protesta de la oposición, en rechazo a políticas de un gobierno que venía violando tradicionales normas de convivencia social. Pero el gobierno seguía siendo legítimo para otra gigantesca porción de la sociedad. Ello estaba a la vista, alrededor del Palacio de Miraflores, pero no podía ser vista por esta otra “sociedad civil”, por las carencias teóricas y prácticas de organizaciones inadecuadas para la representación y mediación entre Estado y sociedad. Tal situación fue aprovechada por intereses oscuros y poderosos, de carácter nacional e internacional, que forman parte de la hegemonía neoliberal del contexto mundial. Gobiernos impopulares elegidos democráticamente siempre los ha habido y gobiernos ilegítimos para ciertos sectores de la sociedad también. En democracia, actores de vocación democrática los combaten dentro del estado de derecho. Es la única garantía para quienes no somos poderosos de que nuestros derechos e intereses serán respetados.

Como conclusión

La crisis política venezolana sigue abierta, las tendencias conspirativas para una salida autoritaria siguen presentes, toda vez que el gobierno legítimo, repuesto en el poder, evidencia una debilidad política extremadamente peligrosa para su supervivencia. Las distintas instituciones del Estado para garantizar el estado de derecho, los partidos, los poderes públicos, las instancias administradoras de la justicia, los cuerpos de seguridad del Estado, todas ellas han quedado golpeadas por esta aventura autoritaria. El panorama para la recomposición de la institucionalidad venezolana luce hoy como un desafío gigantesco.

Sin embargo, así como el gobierno evidencia su extrema debilidad, la oposición también lo revela en su fractura post golpe y en las carencias de su liderazgo político. El golpe de Estado sirvió para demostrar que las fuerzas que se oponen al proyecto del Presidente y su alianza de fuerzas, aparte de las antipopulares aspiraciones que las animan, son apenas una plataforma política unida por el objetivo de derrocar a Chávez. Pero más allá de eso, carecen de proyecto compartido, de organizaciones políticas idóneas, de liderazgo lúcido para construir una hegemonía alternativa. Esta situación le ha dado al proyecto chavista una segunda oportunidad. Con ella la sociedad venezolana sigue teniendo la posibilidad de avanzar en un proceso de cambios en democracia, con inclusión y justicia social. Pero los desafíos son enormes.

Bibliografía

- LACLAU, Ernesto (1978): “Tesis acerca de la forma hegemónica de la política” en Julio Labastida Martín del Campo, *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México, siglo XXI.
- LANDER, Edgardo (1995): *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*, Caracas, Ediciones de la UCV.
- LÓPEZ MAYA, Margarita (2002): “Entre protestas y contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y debilita”, *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, enero, pp. 97- 103.
- y Luis E. Lander (2001): “Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984 1998” en Emir Sader (comp.), *El ajuste estructural en América Latina*, Buenos Aires, Clacso-Asdi, pp. 231-254.
- MOORE, Barrington jr. (1978): *Injustice. The Social Bases of Obedience & Revolt*, EEUU, The Macmillan Press Ltd.